

No. 34193

**SPAIN
and
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS**

**Convention concerning judicial assistance in civil matters.
Signed at Madrid on 26 October 1990**

Authentic texts: Spanish and Russian.

Registered by Spain on 25 November 1997.

**ESPAGNE
et
UNION DES RÉPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES**

**Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile.
Signée à Madrid le 26 octobre 1990**

Textes authentiques : espagnol et russe.

Enregistrée par l'Espagne le 25 novembre 1997.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL

El Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, guiados por el deseo de robustecer las relaciones amistosas y la colaboración entre los dos Estados, con el propósito de facilitar el acceso de sus nacionales a los órganos judiciales del otro Estado, asegurar el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en el territorio del otro Estado, así como regular la asistencia judicial en materia civil, conscientes de la necesidad de profundizar y facilitar sus relaciones judiciales, recogidas en la Convención de La Haya en materia de procedimiento civil firmada el 1 de marzo de 1.954, han acordado celebrar el presente Convenio.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Protección jurídica

1. Los nacionales de una Parte Contratante, gozarán en el territorio de la otra Parte Contratante, de la protección jurídica tanto de su persona como de sus bienes, igual a la que gozan los nacionales de la otra Parte Contratante.
2. Los nacionales de una Parte Contratante tendrán libre acceso a los tribunales así como a otros organismos de la otra Parte Contratante, cuya competencia comprenda los

asuntos pertenecientes al derecho civil, incluidos los de familia y mercantiles, en las mismas condiciones que los nacionales de esa Parte.

3. En caso de surgir cualquier duda al aplicarse este Convenio en relación con la nacionalidad de una persona cada Parte Contratante informará, previa solicitud, si la persona mencionada tiene la nacionalidad de esta Parte.

4. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán por analogía también a las personas jurídicas, que hayan sido constituidas en el territorio de una de las Partes Contratantes conforme a las leyes vigentes en ese territorio.

Artículo 2

Los nacionales de una Parte Contratante que comparezcan ante los tribunales de otra Parte Contratante no podrán ser obligados, a prestar fianza, caución u otra garantía, solo por su cualidad de extranjero o por no tener su domicilio o residencia en dicho Estado.

Artículo 3

Los nacionales de una Parte Contratante, recibirán la asistencia jurídica gratuita en la otra Parte Contratante, en las mismas condiciones que sus nacionales.

Artículo 4

Relaciones entre Organismos

1. En el curso del cumplimiento de este Convenio los organismos de las Partes Contratantes mantendrán contactos

entre sí a través de los Organismos Centrales competentes salvo que el presente Convenio no estipule otra cosa.

2. Para los fines de este Convenio, los Organismos Centrales serán los siguientes:

1) Por parte del Reino de España:

el Ministerio de Justicia del Reino de España.

2) Por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

el Ministerio de Justicia de la URSS.

3. En el curso del cumplimiento de este Convenio, los Organismos Centrales de las Partes Contratantes utilizarán su idioma nacional en sus relaciones recíprocas.

CAPITULO II

ASISTENCIA JURIDICA EN ASUNTOS CIVILES

Artículo 5

Ambito de la asistencia jurídica

La asistencia jurídica en asuntos civiles comprende la entrega y notificación de documentos, el facilitar información sobre el Derecho vigente y la práctica judicial, así como el cumplimiento de comisiones rogatorias previstas por la legislación de la Parte Contratante requerida, en particular, el interrogatorio de las partes en el proceso, de testigos y peritos, el reconocimiento judicial y la entrega de pruebas materiales.

Los Organismos Centrales de las Partes Contratantes, previa solicitud y en los casos y por los

procedimientos previstos en su propia legislación, se prestarán asistencia para localizar en su territorio respectivo, el domicilio de las personas que fueren demandadas, por residentes en el territorio de la otra Parte.

Artículo 6

Solicitud de asistencia jurídica

1. La solicitud de asistencia jurídica se redactará en forma escrita y comprenderá los datos siguientes:

- 1) el nombre del órgano requirente;
- 2) el nombre del órgano requerido;
- 3) la denominación del asunto, respecto al cual se requiere la asistencia jurídica, y el contenido de la solicitud;
- 4) los nombres y apellidos de las personas a las que se refiere la solicitud, datos sobre su nacionalidad, ocupación, domicilio o residencia y en lo referente a las personas jurídicas, su denominación y lugar de residencia;
- 5) los nombres y apellidos, y dirección, de los representantes de personas mencionadas en el párrafo 4, si tales existen;
- 6) en caso necesario, la lista de las preguntas a formular a testigos y peritos, así como la lista de los documentos reclamados u otras pruebas;

2. La solicitud de asistencia jurídica expresará la fecha, se firmará por la persona competente y se refrendará por sello.

3. Si la dirección indicada en la solicitud sobre asistencia jurídica es incorrecta o la persona de que se

trate en la solicitud no tiene en la misma su domicilio, el órgano requerido tomará las medidas necesarias para averiguar la dirección correcta.

Artículo 7

Cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica

1. La asistencia se prestará conforme a las normas de procedimiento de la Parte requerida. Sin embargo, se podrá seguir un procedimiento especial en caso de que no haya incompatibilidad con la legislación de la Parte requerida y no haya imposibilidad para aplicarla debido a dificultades prácticas.
2. Si dicha asistencia jurídica no es de competencia del órgano requerido, éste transferirá la solicitud al órgano competente.
3. A solicitud del órgano requirente, el órgano requerido comunicará en debido tiempo, a aquél y a las partes interesadas, y en caso de necesidad a sus representantes, la fecha, el momento y el lugar del cumplimiento de la solicitud.
4. La solicitud de asistencia jurídica se cumplirá en el plazo mínimo posible. El órgano requerido comunicará en forma escrita al órgano requirente el cumplimiento de la solicitud y devolverá los documentos. Si la solicitud no pudiese ser cumplida se le comunicará inmediatamente por escrito al órgano requirente, indicando las causas que lo hayan impedido; la documentación se devolverá.

Artículo 8

Entrega de documentos

1. El órgano requerido efectuará la entrega de la documentación conforme a las normas vigentes en su Estado, si están redactados en su idioma nacional o van acompañados de una traducción legalizada. Cuando los documentos no estén redactados en el idioma nacional de la Parte requerida o no vayan acompañados de la traducción, se entregarán al destinatario si está de acuerdo en recibirlos voluntariamente.

2. En la solicitud de entrega se indicarán las señas completas del destinatario y la denominación del documento entregado. Si la dirección fuese incompleta o imprecisa, el órgano requerido tomará medidas para establecer sus señas completas, conforme a su legislación.

3. El acuse de recibo de documentos se redactará conforme a las normas de entrega de documentos vigentes en el territorio de la Parte requerida y se enviará al órgano requirente. En el acuse, se indicarán la fecha y el lugar de la entrega, así como la persona que recibió el documento. Caso de no haberse podido efectuar la entrega, deberán comunicarse las causas que la hayan impedido.

Artículo 9

Entrega de documentos y cumplimiento de ciertos actos de procedimiento por las representaciones diplomáticas u organismos consulares.

Las Partes Contratantes tendrán derecho a entregar documentos y a cumplir otros actos de procedimiento, respecto a sus nacionales, por conducto de sus

representaciones diplomáticas o consulares. No podrán aplicarse en estos casos medidas de carácter coactivo.

Artículo 10

Inmunidad de testigos y peritos

1. Si un testigo o perito, cualquiera que sea su nacionalidad, comparece ante el órgano requirente, mediante citación del órgano requerido, no se podrá proceder contra él en el territorio de la Parte Contratante requirente, ni detenerle ni condenarle por acciones anteriores a su entrada en dicho Estado. Tampoco se podrá proceder contra esas personas ni detenerlas ni condenarlas debido a sus declaraciones como testigo o dictamen en calidad de perito.

2. La protección concedida en el párrafo 1 cesará una vez transcurridos quince días después de que el órgano requirente comunique al testigo o al perito que su presencia ya no se requiere, excepto el período durante el cual no pudo abandonar el territorio de la Parte requirente por causas ajenas a su voluntad.

3. No se aplicarán medidas de carácter coactivo ni otras sanciones contra el testigo o el perito que no hubiere comparecido ante el órgano de la Parte requirente.

4. El órgano requirente deberá comunicar a las personas solicitadas en calidad de testigo o perito, que tendrán derecho a indemnización de gastos de viaje y estancia. El perito tendrá derecho además a la remuneración por haber realizado el peritaje. A solicitud de esas personas, el órgano mencionado les pagará por adelantado la suma suficiente para cubrir gastos de viaje y estancia.

Artículo 11

Denegación de asistencia jurídica

La asistencia jurídica podrá denegarse cuando la Parte requerida considere que dicho cumplimiento podría menoscabar su soberanía, poner en peligro su seguridad o infringir principios básicos de su ordenamiento jurídico.

Artículo 12

Gastos producidos por prestar asistencia jurídica

Las Partes Contratantes asumirán todos los gastos que se produzcan por prestar asistencia jurídica en sus territorios respectivos.

Artículo 13

Interoambio de información

Los Organismos Centrales de las Partes Contratantes, previa solicitud, se informarán, recíprocamente sobre la legislación vigente o derogada de sus Estados y práctica judicial en los asuntos que surjan en aplicación de las cláusulas del presente Convenio.

CAPITULO III

DOCUMENTACION

Artículo 14

1. Los documentos que hayan sido expedidos o testificados conforme a las normas establecidas y refrendados con el

sello oficial del órgano competente o del funcionario de una de las Partes Contratantes, no requerirán en el territorio de la otra Parte Contratante legalización alguna. Lo mismo se aplicará también en relación con firmas en los documentos y legalizadas según el procedimiento interno de las Partes Contratantes.

2. Los documentos que en el territorio de una de las Partes Contratantes se consideren como documentos oficiales, tendrán también en el territorio de la otra Parte Contratante la fuerza probatoria de un documento oficial.

Artículo 15

Con el fin de aplicar el presente Convenio, a instancia de las Partes Contratantes se enviarán de conformidad con sus respectivas legislaciones, certificación del Registro Civil y otros documentos referentes a los derechos personales y patrimoniales de los nacionales de las Partes Contratantes. Dichos documentos se pondrán a disposición de la Parte Contratante requirente por la vía diplomática, libres de gastos y sin traducción.

Artículo 16

Las Partes Contratantes se cursarán a petición previa, copias de las resoluciones judiciales firmes referentes al estado civil de los nacionales de la otra Parte Contratante, según el procedimiento previsto por el artículo 4 del presente Convenio .

CAPITULO IV

RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES

Artículo 17

1. Las resoluciones de los órganos de una Parte Contratante indicados en el párrafo 2 del Artículo 1 se reconocerán y si la índole de la resolución lo requiere, se ejecutarán en el territorio de la otra Parte Contratante en las condiciones previstas por este Convenio.

2. Las resoluciones judiciales mencionadas en el párrafo 1, serán:

- 1) Resoluciones en materia civil y mercantil;
- 2) Transacciones judiciales;
- 3) Sentencias penales en lo referente a la indemnización del daño causado por delito.

3. No se aplicarán las disposiciones del presente Capítulo en caso:

- 1) De las resoluciones en materia de quiebras y procedimientos análogos;
- 2) De las resoluciones en materia de Seguridad Social;
- 3) De las resoluciones en materia de indemnización de daños causados por la energía nuclear;
- 4) De los laudos arbitrales.

CONDICIONES DEL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE RESOLUCIONES

Artículo 18

Las resoluciones indicadas en el artículo 17, se reconocerán y ejecutarán cuando:

- 1) La resolución, según la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya dictado, sea ejecutoria;
- 2) El demandado o su representante que no hubiere comparecido ante los tribunales, hubieren sido debidamente y a tiempo emplazados según las leyes de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya dictado la sentencia. No será válida la citación hecha mediante edictos;
- 3) En el Estado donde deba reconocerse y ejecutarse la resolución o en un tercer Estado, no se hubiese dictado sentencia ejecutoria entre las mismas partes y sobre los mismos hechos o cuando en aquél Estado no se hubiese iniciado con anterioridad un proceso entre las mismas partes y sobre los mismos hechos;
- 4) El tribunal que haya dictado la resolución sea competente de conformidad con los artículos 19 y 20 del presente Convenio;
- 5) Conforme a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio la resolución ha de ser reconocida y ejecutada, el asunto no sea de la exclusiva competencia de sus órganos.
- 6) El reconocimiento o la ejecución de la resolución no afecte a la soberanía, seguridad o principios básicos de la legislación de la Parte Contratante requerida.

Artículo 19

Competencia de los tribunales

1. Para los fines de este Capítulo, se considerará competente el tribunal del Estado que haya dictado la resolución, cuando la persona demandada tuviere su domicilio en dicho Estado, cualquiera que sea su nacionalidad.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, será competente el tribunal que haya dictado la resolución, sin consideración del domicilio, en cualquiera de los casos siguientes:

- 1) Cuando la obligación que sirviere de base a la demanda hubiese sido o debiere ser cumplida en dicho Estado;
- 2) En materia de alimentos, cuando el acreedor tuviere su domicilio o residencia en dicho Estado;
- 3) En materia delictual, si el hecho u otras circunstancias, que sirvieran de base para la reclamación de la indemnización del daño, hubiere tenido lugar en el territorio de dicho Estado;
- 4) En materia de indemnización de daños o perjuicios causados por un delito, que hubiere dado lugar a un procedimiento penal en dicho Estado, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho Estado pudiera conocer de la acción civil en un procedimiento penal;
- 5) En materia relativa a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, que estuvieren sitios en el territorio de dicho Estado;
- 6) En materia de sucesión sobre bienes muebles, si el causante de la sucesión hubiere tenido su último domicilio en dicho Estado.

Artículo 20

El tribunal que haya dictado la resolución tendrá competencia exclusiva en los casos siguientes:

- 1) En materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, así como de sucesión en éstos, si el inmueble, estuviere sito en el territorio de dicho Estado;
- 2) En materia de validez o disolución de sociedades y personas jurídicas o de decisiones de sus órganos,

cuando tuvieren su domicilio en el territorio de dicho Estado;

- 3) En materia de validez de las inscripciones en los Registros públicos que se hubieren efectuado en el territorio de dicho Estado.

Artículo 21

1. Las resoluciones se reconocerán y ejecutarán cuando se hubieran dictado después de la entrada en vigor del presente Convenio.

2. Las resoluciones que no deban ser ejecutadas según su naturaleza, se reconocerán aunque hubiesen sido dictadas antes de la entrada en vigor de este Convenio, siempre que se hubiesen fundado en una regla de competencia reconocida en el mismo.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION

Artículo 22

1. La solicitud de otorgamiento de la ejecución y de cumplimiento de la misma, podrá hacerse a través de los órganos del Estado donde haya sido dictada, los cuales enviarán la solicitud al órgano competente de la otra Parte Contratante.

2. La solicitud podrá presentarse directamente en el órgano competente de la otra Parte Contratante si la persona que solicita el otorgamiento de la ejecución tuviere el domicilio o la residencia en el territorio de la misma.

Artículo 23

Se deberá acompañar a la solicitud indicada en el artículo 22:

- 1) Una copia auténtica de la resolución y una certificación en la que conste que es ejecutoria si esto no se desprende del texto de la misma resolución;
- 2) Una certificación en la que conste que la parte que no hubiere comparecido ante el tribunal o su representante, fueron emplazados de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 18;
- 3) Las traducciones legalizadas de los documentos indicados en los párrafos 1 y 2 del presente artículo así como la de la solicitud.

Artículo 24

1. Las resoluciones se reconocerán en los territorios de las dos Partes Contratantes sin procedimiento adicional alguno si no fueran impugnadas.

2. Los órganos competentes ante los que se presentaren las solicitudes de ejecución deberán ordenarlas.

3. A los efectos del presente artículo son competentes:

En España, los Juzgados de Primera Instancia;

En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

- Los Tribunales Supremos de las Repúblicas (que no tienen división regional) (Верховный Суд Союзной Республики -для республик, не имеющих областного деления-)

- Los Tribunales Supremos de las Repúblicas Autónomas (Верховный Суд автономной Республики)
- Los Tribunales Territoriales, Regionales o Municipales (Краевой, областной или городской Суд)
- Los Tribunales de las Regiones Autónomas (Суд Автономной Области)
- Los Tribunales de las Provincias Autónomas (Суд Автономного Округа)

4. Se facilitará información sobre la resolución adoptada al órgano requirente.

5. Al permitir la ejecución de la resolución el tribunal no la revisará en cuanto al fondo, sino que se limitará a determinar que se han cumplido las condiciones previstas en los artículos 18, 19, 20 y 23.

6. Si la resolución ha sido dictada sobre varias reclamaciones, podrá permitirse la ejecución parcial.

7. El procedimiento de ejecución se regulará por la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio tenga lugar la ejecución de dicha resolución.

Artículo 25

Transacciones judiciales

Las transacciones judiciales pueden ser ejecutadas, de conformidad con lo prevenido en este Capítulo, en lo que sea aplicable.

Artículo 26

Salida de objetos y transferencia de dinero

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a la legislación de las Partes Contratantes sobre transferencia de dinero y de objetos adquiridos durante la ejecución.

CAPITULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27

El presente Convenio estará sujeto a ratificación y entrará en vigor pasados 60 días del momento del intercambio de los Instrumentos de Ratificación que se efectuará en Moscú.

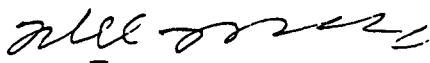
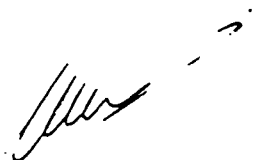
Artículo 28

El presente Convenio se concluye por un plazo indefinido. Cada Parte Contratante podrá denunciarlo mediante notificación escrita por vía diplomática, terminando su vigencia a los 6 meses de la fecha de la denuncia.

Hecho en Madrid, el26..... de octubre....
de 1940. en dos originales, cada uno en español y ruso,
siendo ambos textos igualmente idénticos.

Por el Reino de España:

Por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas:



F. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

E. SHEVERDNADZE

[RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE]

ДОГОВОР МЕЖДУ КОРОЛЕВСТВОМ ИСПАНИИ И СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Королевство Испания и Союз Советских Социалистических Республик, руководимые обоим желанием укреплять дружественные отношения и сотрудничество между двумя государствами,

стремясь облегчить доступ своих граждан в суды другого государства, обеспечить признание и исполнение судебных решений, вынесенных на территории другого государства, и упорядочить правовую помощь по гражданским делам,

осознавая необходимость углубления и облегчения своих правовых отношений, регулируемых Гаагской Конвенцией по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 года,

договорились о нижеследующем:

ГЛАВА I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья I

Правовая защита

1. Граждане одной Договаривающейся Стороны пользуются на территории другой Договаривающейся Стороны в отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и граждане этой Договаривающейся Стороны.

2. Граждане одной Договаривающейся Стороны имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды и в иные учреждения другой Договаривающейся Стороны, к компетенции которых относятся гражданские (включая торговые и семейные) дела, на тех же условиях, как и обобственные граждане.

3. В случае возникновения каких-либо сомнений при выполнении настоящего Договора в отношении гражданства того или иного лица каждая Договаривающаяся Сторона информирует другую Сторону по ее просьбе о том, имеет ли указанное лицо гражданство этой Стороны.

4. Положения настоящего Договора применяются соответственно и к юридическим лицам, учрежденным на территории одной из Договаривающихся Сторон согласно законам, действующим на ее территории.

Статья 2

На граждан одной Договаривающейся Стороны, выступающих в судах другой Договаривающейся Стороны, нельзя возложить обязанность по обеспечению судебных расходов на том основании, что они являются иностранцами или не имеют местожительства или местопребывания на территории Договаривающейся Стороны, в судах которой они выступают.

Статья 3

Гражданам одной Договаривающейся Стороны в судах и иных учреждениях другой Договаривающейся Стороны будут оказываться бесплатная юридическая помощь и обеспечиваться бесплатное судопроизводство на тех же основаниях и с теми же преимуществами, как и собственным гражданам.

Статья 4

Порядок сношений

1. При выполнении настоящего Договора учреждения Договаривающихся Сторон сносятся между собой через компетентные центральные органы, если настоящий Договор не предусматривает иное.

2. Для целей настоящего Договора центральными органами являются следующие:

1) со стороны Королевства Испании — Министерство юстиции Королевства Испании;

2) со стороны Союза Советских Социалистических Республик — Министерство юстиции СССР.

3. При выполнении настоящего Договора центральные органы Договаривающихся Сторон используют во взаимных отношениях язык своей страны.

ГЛАВА II

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Статья 5

Объем правовой помощи

Правовая помощь по гражданским делам охватывает вручение и пересылку документов, предоставление информации о действующем праве и судебной практике и выполнение отдельных процессуальных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности допрос сторон, свидетелей, экспертов, проведение судебного осмотра, передачу вещественных доказательств.

Центральные органы Договаривающихся Сторон в случаях и порядке, предусмотренных собственным законодательством, оказывают друг другу по просьбе содействие в установлении адресов проживающих на их территории лиц, к которым лицами, имеющими местожительство или местопребывание на территории другой Договаривающейся Стороны, предъявлены гражданско-правовые требования.

Статья 6

Просьба о правовой помощи

I. Просьба о правовой помощи должна быть составлена в письменной форме и содержать следующие данные:

- 1) наименование запрашивающего учреждения;
- 2) наименование запрашиваемого учреждения;
- 3) наименование дела, по которому запрашивается правовая помощь, и содержание просьбы;
- 4) имена и фамилии лиц, имеющих отношение к просьбе, сведения об их гражданстве, занятии и местожительстве или местопребывании, а применительно к юридическим лицам — их наименование и местонахождение;

5) имена, фамилии и адреса представителей лиц, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, если таковые имеются;

6) в случае необходимости изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень требуемых документов и других доказательств.

2. Просьба о правовой помощи должна содержать указание на дату ее составления, должна быть подписана компетентным лицом и удостоверена печатью.

3. Если адрес, указанный в просьбе о правовой помощи, является неточным или лицо, о котором идет речь в просьбе, не проживает по указанному адресу, запрашиваемое учреждение предпринимает необходимые меры для того, чтобы установить правильный адрес.

Статья 7

Исполнение просьбы о правовой помощи

1. Запрашиваемое учреждение оказывает правовую помощь в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством своего государства. Однако по просьбе оно может применить специальный процессуальный порядок при условии, что этот порядок не является несовместимым с законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны и что его применение не является невозможным в связи с практическими трудностями.

2. Если запрашиваемое учреждение не компетентно оказать правовую помощь, оно пересылает просьбу компетентному учреждению.

3. По просьбе запрашивающего учреждения запрашиваемое учреждение своевременно сообщает ему и заинтересованным сторонам, а в случае необходимости — их представителям о времени и месте исполнения просьбы.

4. Просьба о правовой помощи исполняется в возможно короткие сроки. Запрашиваемое учреждение сообщает запрашивающему учреждению в письменной форме об исполнении просьбы и возвращает документы. Если просьба не могла быть исполнена, об этом незамедлительно сообщается в письменной форме за-

прашивающему учреждению с указанием причин неисполнения и возвращаются документы.

Статья 8

Вручение документов

1. Запрашиваемое учреждение осуществляет вручение документов в соответствии с правилами вручения документов, действующими в его государстве, если вручаемые документы составлены на его языке или снабжены заверенным переводом. В тех случаях, когда документы составлены не на языке запрашиваемой Договаривающейся Стороны или не снабжены переводом, они вручаются получателю, если он согласен добровольно их принять.

2. В просьбе о вручении должны быть указаны точный адрес получателя и наименование вручаемого документа. Если указанный в просьбе о вручении адрес оказался неполным или неточным, запрашиваемое учреждение в соответствии со своим законодательством принимает меры для установления точного адреса.

3. Подтверждение вручения документов оформляется в соответствии с правилами вручения документов, действующими на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны, и направляется запрашивающему учреждению. В подтверждении должны быть указаны время и место вручения, а также лицо, которому вручен документ. При невозможности вручения сообщается о причинах, по которым оно не могло состояться.

Статья 9

Вручение документов и исполнение отдельных процессуальных действий дипломатическими или консульскими представительствами

Договаривающиеся Стороны имеют право вручать документы и исполнять отдельные процессуальные действия в отношении собственных граждан через свои дипломатические или консуль-

ские представительства. В этих случаях не могут применяться меры принудительного характера.

Статья 10

Неприкосновенность свидетелей и экспертов

1. Свидетель или эксперт, который по вызову, врученному запрашиваемым учреждением, явится в запрашивающее учреждение, не может быть, независимо от его гражданства, привлечен на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны к уголовной ответственности, взят под стражу или подвергнут наказанию за преступление, совершенное до въезда на территорию названной Стороны. Такие лица не могут быть также привлечены к уголовной ответственности, взяты под стражу или подвергнуты наказанию в связи с их свидетельскими показаниями или заключениями в качестве экспертов.

2. Свидетель или эксперт утрачивает предусмотренную в пункте 1 гарантию, если он не оставит территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны до истечения 15 дней с того дня, когда вызвавшее его учреждение сообщило ему, что в его дальнейшем присутствии нет необходимости. В этот срок не засчитывается время, в течение которого свидетель или эксперт не мог покинуть территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны по не зависящим от него обстоятельствам.

3. К свидетелю или эксперту, который не явится по вызову запрашивающей Договаривающейся Стороны, не могут быть за это применены какие-либо меры принудительного характера или какие-либо санкции.

4. Запрашивающее учреждение должно сообщить лицу, вызываемому в качестве свидетеля или эксперта, что оно имеет право на возмещение расходов по проезду и пребыванию, а эксперт, кроме того, — на вознаграждение за услуги в качестве эксперта. По просьбе этих лиц указанное учреждение выплачивает им аванс на покрытие расходов по проезду и пребыванию.

Статья II

Отказ в правовой помощи

Правовая помощь не оказывается, если ее оказание может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит основным принципам законодательства запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

Статья I2

Расходы, связанные с оказанием правовой помощи

Договаривающиеся Стороны сами несут все расходы, связанные с оказанием правовой помощи на их территории.

Статья I3

Обмен информацией

Центральные органы Договаривающихся Сторон предоставляют друг другу по просьбе информацию о действующем или действовавшем в их государствах законодательстве и судебной практике по вопросам, возникающим при применении положений настоящего Договора.

ГЛАВА III

ДОКУМЕНТЫ

Статья I4

I. Документы, которые выданы или засвидетельствованы по установленной форме и укреплены официальной печатью компетентного государственного учреждения или должностного лица одной из Договаривающихся Сторон, не требуют на территории другой Договаривающейся Стороны какого-либо удостоверения.

Это относится также к подписям на документах и подписям, засвидетельствованным по правилам одной из Договаривающихся Сторон.

2. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рассматриваются как официальные документы, пользуются и на территории другой Договаривающейся Стороны доказательной силой официального документа.

Статья 15

В целях применения настоящего Договора каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет в соответствии со своим законодательством другой Договаривающейся Стороне по просьбе документы о регистрации актов гражданского состояния и иные документы, касающиеся личных прав и законных интересов граждан другой Договаривающейся Стороны. Указанные документы направляются другой Договаривающейся Стороне в дипломатическом порядке без перевода и бесплатно.

Статья 16

Договаривающиеся Стороны направляют друг другу по просьбе копии вступивших в законную силу судебных решений, касающихся гражданского состояния граждан другой Договаривающейся Стороны, в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Договора.

ГЛАВА IV

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Статья 17

1. Решения учреждений одной Договаривающейся Стороны, указанных в пункте 2 статьи 1, признаются и, если это требуется по характеру решений, исполняются на территории другой Договаривающейся Стороны на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Под решениями в смысле пункта I понимаются:
- 1) решения по гражданским и торговым делам;
 - 2) мировые соглашения, утвержденные судом;
 - 3) приговоры в части, касающейся возмещения ущерба, причиненного преступлением.
3. Положения настоящей главы не применяются:
- 1) к решениям по вопросам банкротства и аналогичным делам;
 - 2) к решениям по вопросам социального обеспечения;
 - 3) к решениям по вопросам возмещения убытков за ущерб, нанесенный действием ядерной энергии;
 - 4) к арбитражным решениям.

Условия признания и исполнения решений

Статья I8

Указанные в статье I7 решения признаются и исполняются, если:

- 1) решение по законам Договаривающейся Стороны, на территории которой оно вынесено, вступило в законную силу и подлежит исполнению;
- 2) ответчик или его представитель, не принявший участия в процессе, был своевременно и надлежащим образом извещен по законам Договаривающейся Стороны, на территории которой вынесено решение. Вызов в суд путем дачи объявления не принимается во внимание;
- 3) на территории Договаривающейся Стороны, где должно быть признано и исполнено решение, или на территории третьего государства не было вынесено вступившее в законную силу решение по тому же правовому спору между теми же сторонами или в этом государстве не было ранее возбуждено производство по тому же правовому спору между теми же сторонами;
- 4) суд, вынесший решение, компетентен в соответствии со статьями I9 и 20 настоящего Договора;
- 5) согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой решение должно быть признано и испол-

нено, дело не относится к исключительной компетенции ее учреждений;

6) признание или исполнение решения не затрагивает суверенитета, безопасности, основных принципов законодательства запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

Статья 19

Компетенция судов

1. Для целей настоящей главы суд Договаривающейся Стороны, на территории которой было вынесено решение, считается компетентным по искам к лицам, независимо от их гражданства, имеющим местожительство на территории данной Договаривающейся Стороны.

2. Суд, вынесший решение, считается компетентным также в одном из следующих случаев, независимо от местожительства ответчика:

1) обязательство из договора, являющееся предметом спора, было или должно быть исполнено в данном государстве;

2) по искам об алиментах — если в данном государстве истец имеет местожительство или местопребывание;

3) по искам, вытекающим из деликтов, — если в данном государстве имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда;

4) по искам о возмещении вреда, причиненного преступлением, если в данном государстве возбуждено уголовное дело, когда законодательство этого государства допускает рассмотрение гражданского иска в уголовном деле;

5) по искам, вытекающим из деятельности отраслевого или иного филиала, агентства, находящегося на территории данного государства;

6) по искам о наследовании движимого имущества — если наследодатель имел в данном государстве последнее постоянное место жительства.

Статья 20

Суд, вынесший решение, исключительно компетентен в следующих случаях:

1) по искам о вещных правах на недвижимое имущество, его найме и аренде, а также о наследовании недвижимого имущества, — если недвижимое имущество находится на территории данного государства;

2) по искам, имеющим своим предметом действительность или прекращение общества или юридического лица либо решение их органов, — если общество или юридическое лицо имеет местонахождение на территории данного государства;

3) по заявлениям относительно действительности записей в книгах записи актов гражданского состояния, — если записи ведутся в данном государстве.

Статья 21

1. Решения признаются и исполняются, если они вынесены после вступления в силу настоящего Договора.

2. Решения, если они по своему характеру не требуют исполнения, признаются и в том случае, когда они вынесены до вступления в силу настоящего Договора и при этом соответствуют содержащимся в нем нормам о компетенции.

Порядок признания и исполнения решений

Статья 22

1. Ходатайство о выдаче разрешения на исполнение решения и о приведении решения в исполнение подается в учреждение по месту вынесения решения. Это учреждение пересылает ходатайство компетентному суду другой Договаривающейся Стороны.

2. Если лицо, ходатайствующее о разрешении исполнения, имеет местожительство или местопребывание на территории Договаривающейся Стороны, где решение подлежит

исполнению, ходатайство может быть подано и непосредственно компетентному суду этой Договаривающейся Стороны.

Статья 23

К ходатайству, указанному в статье 22, должны быть приложены:

1) заверенная копия решения со справкой о том, что оно вступило в законную силу и подлежит исполнению, если это не вытекает из текста самого решения;

2) документ, из которого следует, что сторона, не принявшая участия в процессе, или ее представитель были извещены о судебном разбирательстве в соответствии с подпунктом 2 статьи 18;

3) заверенный перевод документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей статьи, а также перевод ходатайства.

Статья 24

1. Решения признаются на территории Договаривающихся Сторон без дополнительного разбирательства, если только они не оспариваются.

2. Для исполнения решений компетентные суды Договаривающейся Стороны, на территории которой ставится вопрос об исполнении, принимают решение о разрешении исполнения.

3. Компетентными в соответствии с настоящей статьей судами считаются:

в Испании — суды первой инстанции;

в СССР — Верховный Суд союзной республики (в республиках, не имеющих областного деления), Верховный Суд автономной республики, краевой, областной, городской суд, суд автономной области и суд автономного округа.

4. О принятом решении информируется запрашивающее учреждение.

5. При выдаче разрешения на исполнение суд не пересматривает решение по существу, а ограничивается установлением того, что условия, предусмотренные статьями 18, 19, 20 и 23, выполнены.

6. Если решение вынесено по нескольким исковым требованиям, исполнение может быть разрешено частично.

7. Процедура выдачи разрешения на исполнение и порядок исполнения регулируются законодательством Договаривающейся Стороны, на территории которой должно иметь место исполнение.

Статья 25

Мировые соглашения

Положения настоящей главы применяются и к исполнению мировых соглашений, утвержденных судом.

Статья 26

Вывоз вещей и перевод денежных сумм

Положения настоящего Договора не затрагивают законодательства Договаривающихся Сторон о переводе денежных сумм и с вывозе предметов, приобретенных в результате исполнения.

ГЛАВА У

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу через 60 дней со дня обмена ратификационными грамотами, который состоится в Москве.

Статья 28

Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Каждая из Договаривающихся Сторон может прекратить его действие

путем письменного уведомления по дипломатическим каналам за шесть месяцев до намечаемой ею даты прекращения действия Договора.

Совершено в Мадриде 26 сентября 1990 года в двух экземплярах, каждый на испанском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Королевство
Испании:



За Союз Советских
Социалистических Республик:



[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT¹ BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS CONCERNING
JUDICIAL ASSISTANCE IN CIVIL MATTERS

The Kingdom of Spain and the Union of Soviet Socialist Republics,

Guided by their common wish to strengthen friendly relations and cooperation
between the two States,

Wishing to facilitate access by their nationals to the courts of the other State, to
ensure the recognition and enforcement of all judgements rendered in the territory
of the other State and to regulate judicial assistance in civil matters,

Aware of the need to expand and facilitate their judicial relations, which are
regulated by the Convention relating to civil procedure signed at The Hague on
1 March 1954,²

Have agreed as follows:

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

LEGAL PROTECTION

1. Nationals of one Contracting Party shall enjoy in the territory of the other
Contracting Party legal protection of both their person and their property equal to
that afforded to nationals of the other Contracting Party.

2. Nationals of one Contracting Party shall have free access to the courts and
other institutions of the other Contracting Party having jurisdiction in matters of
civil law, including family and trade law, on the same conditions as nationals of that
Party.

3. If, in applying this Agreement, any doubts should arise as to a person's
nationality, either Contracting Party shall, upon request, inform the other whether
the person in question has the nationality of that Party.

4. The provisions of this Agreement shall also apply *mutatis mutandis* to legal
entities constituted in the territory of either Contracting Party in accordance with
the legislation in force in that territory.

Article 2

A national of one Contracting Party appearing before the courts of the other
Contracting Party shall not be subject to any requirement of security or other guar-

¹ Came into force on 22 July 1997 by the exchange of the instruments of ratification, which took place at Moscow, in accordance with article 27.

² United Nations, *Treaty Series*, vol. 286, p. 265.

antee solely by reason of his status as an alien or because he is not domiciled or resident in the State in question.

Article 3

Nationals of one Contracting Party shall receive in the other Contracting Party the same benefit of legal assistance as its nationals.

Article 4

INTER-INSTITUTIONAL RELATIONS

1. In applying this Agreement and except as otherwise provided therein, the institutions of the Contracting Parties shall maintain contact with each other through their competent central institutions.

2. For the purposes of this Agreement, the central institutions shall be:

(1) For the Kingdom of Spain: The Ministry of Justice of the Kingdom of Spain;

(2) For the Union of Soviet Socialist Republics: The Ministry of Justice of the USSR.

3. In applying this Agreement, the central institution of each Contracting Party shall use its national language in its contacts with the other institution.

CHAPTER II

JUDICIAL ASSISTANCE IN CIVIL MATTERS

Article 5

SCOPE OF JUDICIAL ASSISTANCE

Judicial assistance in civil matters shall include transmission and service of documents, provision of information on applicable legislation and judicial practice and execution of letters rogatory in accordance with the legislation of the requested Contracting Party, in particular the questioning of the parties to an action, witnesses and experts, institution of judicial examinations and transmission of material evidence.

The central institutions of the Contracting Parties shall, in the cases and under the procedures provided for under their own legislation, render each other assistance, upon request, in identifying in their respective territories the address of persons on whom residents in the territory of the other Party have a claim.

Article 6

REQUEST FOR JUDICIAL ASSISTANCE

1. Requests for judicial assistance shall be made in writing and shall contain the following information:

(1) The name of the requesting institution;

- (2) The name of the requested institution;
 - (3) Specific details of the case in which legal assistance is being requested and the subject of the request;
 - (4) The names and surnames of the persons to whom the request refers, information concerning their nationality, occupation and domicile or residence and, in the case of legal entities, their name and place of residence;
 - (5) The names, surnames and addresses of the representatives, if any, of the persons mentioned in paragraph 4;
 - (6) Where necessary, a list of the questions requiring replies from witnesses and experts and a list of the documents and other evidence required.
2. The request for judicial assistance shall indicate the date, shall be signed by the competent person and shall bear an official seal.
 3. If the address indicated in the request for judicial assistance is incorrect or if the person referred to therein does not reside at the address given, the requested institution shall take the necessary steps to determine the correct address.

Article 7

PROCESSING OF REQUESTS FOR JUDICIAL ASSISTANCE

1. Assistance shall be afforded in accordance with the rules of procedure of the requested Party. However, unless incompatible with the legislation of the requested Party or impossible to implement for practical reasons, a special procedure may be applied upon request.
2. If the requested institution does not have jurisdiction to afford such judicial assistance, it shall transmit the request to the competent institution.
3. The requested institution shall, at the request of the requesting institution, provide it and the interested parties, and where necessary their representatives, with timely notification of the date, time and place of processing of the request.
4. A request for judicial assistance shall be processed within the shortest possible time. The requested institution shall notify the requesting institution in writing that the request has been processed and shall return the documentation. If the request proves impossible to process, the requesting institution shall immediately receive written notification, giving the reasons why it could not be processed, and the documentation shall be returned.

Article 8

SERVICE OF DOCUMENTS

1. The requested institution shall effect the service of documents in accordance with the rules in force in its State, if such documents are written in its national language or accompanied by an authorized translation. When they are not written in the national language of the requested Party or are not accompanied by a translation, they shall be served on the recipient, if he freely agrees to accept them.
2. Requests for service shall contain the full address of the recipient and details of the document served. If the address is incomplete or imprecise, the requested

institution shall take steps, in accordance with its legislation, to determine the full address.

3. Receipt of documents shall be acknowledged in accordance with the rules governing the service of documents in force in the territory of the requested Party. The acknowledgement shall be sent to the requesting institution, indicating the date and place of service and the person who received the document. If the requested authority cannot effect service, it shall communicate the reasons to the requesting State.

Article 9

SERVICE OF DOCUMENTS AND EXECUTION OF OTHER PROCEDURES BY DIPLOMATIC MISSIONS OR CONSULAR POSTS

The Contracting Parties shall be entitled to serve documents and execute other procedures in respect of their nationals through their diplomatic or consular missions. No coercion shall be used in such cases.

Article 10

IMMUNITY OF WITNESSES AND EXPERTS

1. A witness or expert of any nationality appearing before the requesting institution in response to a summons from the requested institution shall not be subject to prosecution in the territory of the requesting Contracting Party, detention or punishment in connection with actions occurring prior to his entry into that State. Neither may such person be tried, detained or convicted on the basis of his testimony or expert opinion.

2. The protection provided for in paragraph 1 shall cease 15 days after the date on which the requesting institution notifies the witness or expert that his presence is no longer required. Such time limit shall not include any period during which the witness or expert was unable, for reasons beyond his control, to leave the territory of the requesting Party.

3. A witness or expert who fails to appear before the institution of the requesting Party shall not be subject to coercion or other punishment.

4. The requesting institution shall inform persons summoned to be a witness or expert of their entitlement to compensation for travel costs and living expenses. Experts shall also be entitled to fees for their expert evidence. A witness or expert shall, upon request, be paid an advance against travel costs and living expenses by the institution in question.

Article 11

REFUSAL OF JUDICIAL ASSISTANCE

Judicial assistance may be refused if, in the opinion of the requested Party, the provision of such assistance might endanger its sovereignty or security or the basic principles of its legal system.

Article 12

COSTS OF JUDICIAL ASSISTANCE

Each Contracting Party shall bear all the costs arising out of the provision of judicial assistance in its territory.

Article 13

EXCHANGE OF INFORMATION

The central institutions of the Contracting Parties shall inform each other, upon request, of legislation that is or has been in force in their States and of judicial practice in matters arising out of the implementation of the provisions of this Agreement.

CHAPTER III

DOCUMENTS

Article 14

1. Documents issued or certified in accordance with the established norms and sealed with the official seal of the competent institution or official of one Contracting Party shall not require any further authentication in the territory of the other Contracting Party. The same shall apply to signatures on documents and to signatures verified according to the internal procedures of the Contracting Parties.

2. Documents considered official documents in the territory of one Contracting Party shall have in the territory of the other Contracting Party the evidential force of an official document.

Article 15

For the purposes of this Agreement, the Contracting Parties shall, upon request, transmit to each other, in accordance with their respective legislation, records from the register office and other documents relating to the personal and patrimonial rights of nationals of the Contracting Parties. The documents shall be transmitted in untranslated form to the requesting Contracting Party, without charge, through the diplomatic channel.

Article 16

The Contracting Parties shall, upon request, transmit to each other copies of final court decisions relating to the civil status of nationals of the other Contracting Party, in accordance with the procedure laid down in article 4 of this Agreement.

CHAPTER IV

RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDICIAL DECISIONS

Article 17

1. Decisions rendered by the institutions indicated in article 1, paragraph 2, in one Contracting Party shall be recognized and, where the nature of the decision so requires, enforced in the territory of the other Contracting Party under the conditions provided for in this Agreement.

2. The judicial decisions mentioned in paragraph 1 shall comprise:
 - (1) Decisions concerning civil and commercial matters;
 - (2) Legal settlements;
 - (3) Judgements in criminal matters relating to compensation for damage caused by a criminal offence.
3. The provisions of this chapter shall not apply to the following:
 - (1) Decisions on bankruptcy or other similar proceedings;
 - (2) Decisions on social security matters;
 - (3) Decisions on compensation for damage caused by nuclear power;
 - (4) Arbitral awards.

CONDITIONS FOR THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF DECISIONS

Article 18

The decisions indicated in article 17 shall be recognized and enforced:

- (1) If they are enforceable under the legislation of the Contracting Party in whose territory they were rendered;
- (2) If a defendant or his representative who failed to appear before the courts was duly and promptly summoned in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the judgement was rendered, unless such summons was by judicial edict;
- (3) Unless, in the State where they are to be recognized and enforced, or in a third State, an enforceable judgement was rendered or proceedings previously instituted between the same parties and in relation to the same facts;
- (4) If the court rendering them has jurisdiction in accordance with articles 19 and 20 of this Agreement;
- (5) Unless, under the legislation of the Contracting Party in whose territory they are to be recognized and enforced, the matter is under the exclusive jurisdiction of its institutions;
- (6) Unless recognition or enforcement of the decision affects the sovereignty, security or basic principles of the legislation of the requested Contracting Party.

Article 19

JURISDICTION OF COURTS

1. For the purposes of this chapter, the courts of the State rendering a decision shall be, regardless of the nationality of the defendant, deemed to have jurisdiction if the defendant is domiciled in that State.
2. Notwithstanding the above provision, the court rendering the decision shall be deemed to have jurisdiction, regardless of the domicile of the defendant, in any of the following cases:
 - (1) If the contractual obligation which gave rise to the proceedings has been or is to be fulfilled in the State in question;

(2) If, in a matter relating to maintenance, the recipient is domiciled or resident in the State in question;

(3) If, in a criminal matter, the act or other circumstances which gave rise to a claim for compensation for damage occurred in the territory of the State in question;

(4) If, in a case of compensation for damage caused by a criminal offence giving rise to criminal proceedings in that State, the legislation of the State permits a civil action to be heard concurrently with criminal proceedings;

(5) In a matter relating to the activities of a branch, agency or any other establishment situated in the territory of the State in question;

(6) If, in a matter relating to inheritance of movable property, the deceased was last domiciled in the State in question.

Article 20

The court rendering a decision shall have exclusive jurisdiction in the following cases:

(1) If, in a matter concerning rights over or rental of immovable property, or the inheritance thereof, the property is situated in the territory of the State in question;

(2) If, in a matter concerning the validity or liquidation of companies or legal entities or decisions by their organs, their domicile is in the territory of the State in question;

(3) In a matter relating to the validity of registrations entered in public registers in the territory of the State in question.

Article 21

1. Decisions rendered after the entry into force of this Agreement shall be recognized and enforced.

2. Decisions which, by their nature, require no enforcement shall be recognized, even if rendered before the entry into force of this Agreement, provided that they conform to the rules on jurisdiction contained therein.

PROCEDURE FOR RECOGNITION AND ENFORCEMENT

Article 22

1. An application for execution and enforcement of the decision may be submitted to the institution of the State in which the decision was rendered. The institution shall transmit the application to the competent institution of the other Contracting Party.

2. A person domiciled or resident in the territory of the other Contracting Party may submit his application directly to the competent institution of that Party.

Article 23

The application mentioned in article 22 shall be accompanied by:

- (1) An authenticated copy of the decision and a certificate attesting its enforceability, unless this is obvious from the decision itself;
- (2) A document certifying that a party, or his representative, who failed to appear before the court had been summoned in accordance with article 18, paragraph 2;
- (3) A certified translation of the application and of the documents indicated in paragraphs 1 and 2 of this article.

Article 24

1. Unless they have been challenged, decisions shall be recognized in the territories of the two Contracting Parties without special procedures.

2. Applications for enforcement shall be considered by the competent institution to which they are submitted.

3. For the purposes of this article, the competent institutions shall be:

In Spain, the Court of First Instance;

In the Union of Soviet Socialist Republics:

- The Supreme Court of a republic not having regional divisions,
- The Supreme Court of an autonomous republic,
- Territorial, regional or municipal courts,
- Autonomous region courts,
- Autonomous area courts.

4. The requesting institution shall be notified of decisions rendered.

5. In granting enforcement, the Court shall not examine the substance of a decision, restricting itself to establishing that the conditions provided for in articles 18, 19, 20 and 23 have been met.

6. If a decision relates to more than one claim, partial enforcement shall be admissible.

7. The enforcement procedure shall be conducted in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the enforcement takes place.

*Article 25***LEGAL SETTLEMENTS**

Legal settlements may be enforced in accordance with the provisions of this chapter, where applicable.

Article 26

EXPORT OF ARTICLES AND TRANSFER OF MONEY

The provisions of this Agreement shall not affect the legislation of the Contracting Parties relating to the transfer of money or the export of articles acquired as a result of enforcement.

CHAPTER V

FINAL PROVISIONS

Article 27

This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force 60 days after the exchange of the instruments of ratification, which shall take place in Moscow.

Article 28

This Agreement is concluded for an unlimited period. It may be denounced by either Contracting Party in writing through the diplomatic channel. It shall cease to have effect six months after the date of receipt of the denunciation.

DONE at Madrid on 26 October 1990, in two original copies, in the Spanish and Russian languages, both texts being equally authentic.

For the Kingdom
of Spain:

FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

For the Union of Soviet
Socialist Republics:

EDUARD SHEVARDNADZE

[TRADUCTION — TRANSLATION]¹

CONVENTION² ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET L'UNION
DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES RELATIVE
À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

Le Royaume d'Espagne et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, souhaitant renforcer leurs relations amicales et la collaboration entre les deux États, dans le but de faciliter l'accès de leurs ressortissants aux organes judiciaires de l'autre État, d'assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires rendues sur le territoire de l'autre État, et régir l'entraide judiciaire en matière civile, conscients de la nécessité d'approfondir et faciliter leurs relations judiciaires, recueillies dans la Convention de La Haye relative à la procédure civile signée le 1^{er} mars 1954³, sont convenus de signer la présente Convention.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

PROTECTION JURIDIQUE

1. Les ressortissants d'une Partie contractante jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, de la protection juridique tant de leur personne que de leurs biens, tout comme en jouissent les ressortissants de l'autre Partie contractante.

2. Les ressortissants d'une Partie contractante peuvent accéder librement aux tribunaux et autres organismes de l'autre Partie contractante, qui sont compétents pour connaître des procédures relevant du droit civil, y compris celles relevant du droit de famille ou du commerce, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

3. Au cas où surgirait un doute quelconque en appliquant cette Convention, au sujet de la nationalité d'une personne, chaque Partie contractante communiquera, sur demande, si la personne en question a la nationalité de cette Partie.

4. Les dispositions de cette Convention s'appliquent également par analogie aux personnes juridiques, qui ont été constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément aux lois en vigueur sur ce territoire.

Article 2

Les ressortissants d'une Partie contractante qui comparaissent devant les tribunaux de l'autre Partie contractante ne peuvent pas être obligés de verser des cau-

¹ Traduction fournie par le Gouvernement espagnol — Translation supplied by the Spanish Government.

² Entrée en vigueur le 22 juillet 1997 par l'échange des instruments de ratification, qui a eu lieu à Moscou, conformément à l'article 27.

³ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 286, p. 265.

tions ou d'autres garanties, en raison seulement de leur qualité d'étranger ou parce qu'ils n'ont pas leur domicile ou résidence dans ledit Etat.

Article 3

Les ressortissants d'une Partie contractante, bénéficient de l'assistance judiciaire dans l'autre Partie contractante, dans les mêmes conditions que ses ressortissants.

Article 4

RELATIONS ENTRE ORGANISMES

1. Au cours de l'exécution de cette Convention, les organismes des Parties contractantes auront des contacts entre eux par l'intermédiaire de leurs Autorités centrales compétentes sauf si la présente Convention en dispose autrement.

2. Aux fins de cette Convention, les Autorités centrales sont les suivantes :

1) Pour le Royaume d'Espagne : Le Ministère de la Justice du Royaume d'Espagne;

2) Pour l'Union des République socialistes soviétiques : Le Ministère de la Justice de l'URSS.

3. Pendant l'exécution de cette Convention, les Autorités centrales des Parties contractantes utilisent leur langue nationale pour leurs relations réciproques.

CHAPITRE II

ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

Article 5

CHAMP D'APPLICATION DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

L'entraide judiciaire en matière civile comprend la signification et la notification d'actes, la fourniture de renseignements sur le droit en vigueur et la pratique juridique ainsi que la réalisation de commissions rogatoires prévues par la législation de la Partie contractante requise, en particulier, l'interrogatoire des parties au procès, de témoins et d'experts, la reconnaissance judiciaire et la remise de preuves matérielles.

Les Autorités centrales des Parties contractantes, sur demande préalable et dans les cas et en suivant les procédures prévues dans leur propre législation, se fourniront entraide pour localiser sur leur territoire respectif, le domicile des personnes qui sont requises, par des résidences sur le territoire de l'autre Partie.

Article 6

DEMANDE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

1. La demande d'entraide judiciaire doit être rédigée par écrit et contenir les indications suivantes :

- 1) Le nom de l'organe requérant;
- 2) Le nom de l'organe requis;
- 3) La dénomination de l'affaire, au sujet de laquelle l'entraide judiciaire est requise et le contenu de la demande;
- 4) Les noms et prénoms des personnes auxquelles se réfère la demande, des données sur leur nationalité, leur profession, leur domicile ou résidence, ou en ce qui concerne les personnes juridiques, leur dénomination et siège;
- 5) Les noms, prénoms et adresse des représentants des personnes indiquées au paragraphe 4, s'ils existent;
- 6) S'il y a lieu, la liste des questions à poser aux témoins et experts, ainsi que la liste des actes réclamés ou des autres preuves.

2. La demande d'entraide judiciaire comportera la date, elle sera signée par la personne compétente et portera un sceau.

3. Si l'adresse indiquée dans la demande d'entraide judiciaire n'est pas correcte ou si la personne concernée par la demande n'y a pas son domicile, l'organe requis prend les mesures nécessaires pour rechercher l'adresse correcte.

Article 7

RÉALISATION DE LA DEMANDE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

1. L'entraide se réalise conformément aux normes de procédure de la Partie requise. Néanmoins, on peut suivre une procédure spéciale s'il n'y a pas d'incompatibilité avec la législation de la Partie requise et s'il n'y a pas d'impossibilité de l'appliquer en raison de difficultés pratiques.

2. Si ladite entraide judiciaire ne relève pas de la compétence de l'organe requis, celui-ci transmet la demande à l'organe compétent.

3. Sur demande de l'organe requérant, l'organe requis communique en temps voulu, à celui-ci et aux parties concernées et en cas de nécessité à leurs représentants, la date, le moment, et le lieu de réalisation de la demande.

4. La demande d'entraide judiciaire sera exécutée dans les meilleurs délais. L'organe requis communiquera par écrit à l'organe requérant les réalisations de la demande et retournera les actes. Si la demande ne pouvait pas être réalisée, on le communique immédiatement par écrit à l'organe requérant en indiquant les faits qui ont empêché l'exécution; les actes seront retournés.

Article 8

REMISE DE DOCUMENTS

1. L'organe requis effectue la remise des documents conformément aux normes en vigueur dans son Etat, s'ils sont rédigés dans sa langue nationale ou s'ils sont accompagnés d'une traduction légalisée. Quand les documents ne sont pas rédigés dans sa langue nationale de la Partie requise ou ne sont pas accompagnés de la traduction, ils sont remis au destinataire s'il est d'accord de les recevoir volontairement.

2. Dans la demande de remise, on indique l'adresse complète du destinataire et la dénomination du document remis. Si l'adresse était incomplète ou imprécise, l'organe requis prendrait les mesures nécessaires pour rechercher l'adresse complète conformément à sa législation.

3. L'accusé de réception des documents sera rédigé conformément aux normes de remise de documents en vigueur sur le territoire de la Partie requise et sera envoyé à l'organe requérant. Dans l'accusé, on indique la date et le lieu de la remise ainsi que la personne qui a reçu le document. Au cas où la remise n'a pas pu être effectuée, il faudra communiquer les motifs.

Article 9

REMISE DE DOCUMENTS ET RÉALISATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE PAR LES AGENTS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES.

Les Parties contractantes ont la faculté de remettre des documents et de réaliser d'autres actes de procédure, concernant leurs ressortissants, par les soins de leurs agents diplomatiques ou consulaires. Dans ces cas, on ne peut pas appliquer de mesure à caractère coercitif.

Article 10

IMMUNITÉ DES TÉMOINS ET EXPERTS

1. Si un témoin ou expert, quelque soit sa nationalité comparaît devant l'organe requérant, moyennant citation de l'organe requis, on ne peut pas le poursuivre sur le territoire de la Partie contractante requérante, ni l'arrêter et le condamner pour des actions antérieures à son entrée dans ledit Etat. On ne peut pas non plus poursuivre ces personnes ni les arrêter ou les condamner en raison de leurs déclarations en qualité de témoin ou de leur avis en qualité d'expert.

2. La protection octroyée au paragraphe 1 prend fin quinze jours après que l'organe requérant ait communiqué au témoin ou à l'expert que sa présence n'est plus requise, excepté la période pendant laquelle il n'a pas pu quitter le territoire de la Partie requérante pour des raisons étrangères à sa volonté.

3. On n'appliquera pas de mesures coercitives ni d'autres sanctions contre le témoin ou l'expert qui n'aurait pas comparu devant l'organe de la Partie requérante.

4. L'organe requérant doit communiquer aux personnes réclamées en qualité de témoin ou d'expert, qu'elles ont droit à une indemnisation pour les frais de voyage et de séjour. L'expert a droit, en plus, à une rémunération pour avoir réalisé l'expertise. A la demande de ces personnes, l'organe en question leur avancera la somme suffisante pour couvrir les frais de voyage et de séjour.

Article 11

REFUS D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

L'entraide judiciaire peut être refusée quand la Partie requise considère que l'exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou sa sécurité ou à des principes de base de sa législation.

Article 12

FRAIS PRODUITS PAR L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Les Parties contractantes assument tous les frais engendrés par l'entraide judiciaire sur leur territoire respectif.

Article 13

ECHANGE D'INFORMATIONS

Les Autorités centrales des Parties contractantes, sur demande préalable, s'informeront réciproquement sur la législation en vigueur ou dérogée de leurs Etats et sur la procédure judiciaire dans les affaires qui surgissent en application des clauses de la présente Convention.

CHAPITRE III

DOCUMENTS

Article 14

1. Les documents qui ont été délivrés ou authentifiés conformément aux normes établies et portant le sceau officiel de l'organe compétent ou du fonctionnaire de l'une des Parties contractantes, ne nécessitent aucune légalisation sur le territoire de l'autre Partie contractante. Il en va de même pour les signatures des documents, légalisées selon la procédure interne des Parties contractantes.

2. Les documents qui sur le territoire de l'une des Parties contractantes sont considérés des documents officiels, ont aussi sur le territoire de l'autre Partie contractante la force probatoire d'un document officiel.

Article 15

Aux fins de l'application de la présente Convention, sur demande les Parties contractantes s'enverront, conformément à leurs législations respectives, des extraits de Registre de l'Etat civil et d'autres pièces concernant les droits personnels et patrimoniaux des ressortissants des Parties contractantes. Ces documents sont mis à la disposition de la Partie contractante requérante par la voie diplomatique, sans frais et sans traduction.

Article 16

Les Parties contractantes s'enverront, sur demande préalable, des copies des décisions judiciaires définitives concernant l'état civil des ressortissants de l'autre Partie contractante, conformément à la procédure prévue à l'article 4 de la présente Convention.

CHAPITRE IV

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DE DÉCISIONS JUDICIAIRES

Article 17

1. Les décisions des organes d'une Partie contractante indiquées au paragraphe 2 de l'article 1 sont reconnues et si la nature de la décision l'exige, exécutées sur le territoire de l'autre Partie contractante dans les conditions prévues par cette Convention.

2. Les décisions judiciaires visées au paragraphe 1 sont :

- 1) Décisions en matière civile et commerciale;
- 2) Transactions judiciaires;
- 3) Jugements pénaux concernant l'indemnisation du dommage occasionné par une infraction.

3. On n'applique pas les dispositions du présent chapitre dans les cas :

- 1) De décisions en matière de faillite ou procédures analogues;
- 2) De décisions en matière de sécurité sociale;
- 3) De décisions en matière d'indemnisation de dommages occasionnés par l'énergie nucléaire;
- 4) De décisions d'arbitrage.

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS

Article 18

Les décisions indiquées à l'article 17 sont reconnues et exécutées quand :

1) La décision, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a été rendue, est exécutoire;

2) Le défendeur ou son représentant qui n'aurait pas comparu devant les tribunaux, ont été assignés dûment et dans les temps, conformément aux lois de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue. La citation faite moyennant annonces ne sera pas valable;

3) Dans l'Etat où la décision doit être reconnue et exécutée ou dans un Etat tiers, on n'a pas rendu le jugement exécutoire entre les mêmes parties et sur les mêmes faits ou quand dans cet Etat ou n'a pas engagé antérieurement un procès entre les mêmes parties et sur les mêmes faits;

4) Le tribunal qui a rendu la décision est compétent conformément aux articles 19 et 20 de la présente Convention;

5) Conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue et exécutée, l'affaire ne relève pas de la compétence exclusive de ses organes;

6) La reconnaissance ou l'exécution de la décision ne porte pas atteinte à sa souveraineté, la sécurité ou à des principes de base de la législation de la Partie contractante requise.

Article 19

COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

1. Aux fins de ce chapitre, on considère compétent le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision, quand le défendeur a son domicile dans ledit Etat, quelque soit sa nationalité.

2. En dépit des dispositions du paragraphe antérieur, le tribunal qui a rendu la décision est compétent, sans égard au domicile, dans l'un quelconque des cas suivants :

1) Quand l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée dans ledit Etat;

2) En matière d'obligations alimentaires, quand le créancier a son domicile ou résidence dans ledit Etat;

3) En matière d'infraction, si le fait ou d'autres circonstances, qui servent de fondement à la réclamation de l'indemnisation du dommage, ont eu lieu sur le territoire dudit Etat;

4) En matière d'indemnisation de dommages ou préjudices causés par une infraction qui aurait donné lieu à une procédure pénale dans ledit Etat, dans la mesure où conformément à sa législation, cet Etat pourrait connaître de l'action civile dans une procédure pénale;

5) En matière d'exploitation de succursales, d'agences ou de tout autre établissement qui ont leur siège sur le territoire de cet Etat;

6) En matière de succession sur les biens meubles, si l'ayant droit de la succession a eu son dernier domicile connu dans ledit Etat.

Article 20

Le tribunal qui a rendu la décision a compétence exclusive dans les cas suivants :

1) En matière de droits réels immobiliers et de contrats de location de biens immeubles, ainsi que de succession dans ceux-ci, si l'immeuble se trouve sur le territoire dudit Etat;

2) En matière de validité ou dissolution de sociétés et de personnes juridiques ou de décisions de leurs organes si elles avaient leur siège sur le territoire dudit Etat;

3) En matière de validité des inscriptions dans les registres publics qui auraient été effectuées sur le territoire dudit Etat.

Article 21

1. Les décisions seront reconnues et exécutées quand elles ont été rendues après l'entrée en vigueur dans la présente Convention.

2. Les décisions qui ne doivent pas être exécutées en fonction de leur nature, seront reconnues même si elles ont été rendues avant l'entrée en vigueur de cette Convention, à condition qu'elles aient été fondées sur une règle de compétence reconnue dans celle-ci.

PROCÉDURE DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION

Article 22

1. La demande d'octroi de l'exécution et de l'accomplissement de celle-ci peut se faire par l'intermédiaire des organes de l'Etat où elle a été délivrée, lesquels enverront la demande à l'organe compétent de l'autre Partie contractante.

2. La demande peut être présentée directement à l'organe compétent de l'autre Partie contractante si la personne qui demande l'octroi de l'exécution a son domicile ou sa résidence sur le territoire de celle-ci.

Article 23

La demande visée à l'article 22 doit être accompagnée de :

1) Une expédition authentique de la décision et une attestation dans laquelle il est fait foi qu'elle est exécutoire si cela ne résulte pas du texte de la décision elle-même;

2) Une attestation dans laquelle il est fait foi que la partie qui n'a pas comparu devant le tribunal ou son représentant, ont été assignés conformément au paragraphe 2 de l'article 18;

3) Les traductions légalisées des documents indiqués aux paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que celle de la demande.

Article 24

1. Les décisions sont reconnues sur le territoire des deux Parties contractantes sans aucune procédure additionnelle si elles ne sont pas contestées.

2. Les organes compétents devant lesquels les demandes d'exécution sont présentées devront les ordonner.

3. Aux effets du présent article sont compétents :

En Espagne, les Tribunaux de première instance;

Dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques :

— Les Cours Suprêmes des Républiques (qui n'ont pas de divisions régionales);

— Les Cours suprêmes des Républiques autonomes;

— Les Tribunaux territoriaux, régionaux et municipaux;

— Les Tribunaux des régions autonomes;

— Les Tribunaux des provinces autonomes.

4. Des informations seront fournies sur la décision adoptée par l'organe requérant.

5. En permettant l'exécution de la décision, le tribunal ne la révisera pas quant au fond, et se limitera à déterminer si les conditions prévues aux articles 18, 19, 20 et 23 ont été remplies.

6. Si la décision statue sur plusieurs chefs, on peut permettre l'exécution partielle.

7. La procédure d'exécution est régie par le droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution de ladite décision a lieu.

Article 25

TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Les transactions judiciaires peuvent être exécutées, conformément à ce qui est prévu dans ce Chapitre, dans la mesure applicable.

Article 26

SORTIE D'OBJETS ET TRANSFERT D'ARGENT

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la législation des Parties contractantes sur le transfert d'argent et d'objets acquis pendant l'exécution.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

La présente Convention sera ratifiée et entrera en vigueur le soixantième jour après le moment de l'échange des instruments de ratification qui s'effectuera à Moscou.

Article 28

La présente Convention est conclue pour une durée indéfinie. Chaque Partie contractante peut la dénoncer moyennant notification écrite par la voie diplomatique; sa période de validité se terminera 6 mois après la date de la dénonciation.

FAIT à Madrid, le 26 octobre 1990, en deux originaux, chacun d'entre eux en espagnol et en russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume
d'Espagne :

F. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Pour l'Union des Républiques
socialistes soviétiques :

E. SHEVARDNADZE
